

El primer ministro español, Pedro Sánchez, se ha comprometido a impulsar la regeneración democrática en España. Sin embargo, como argumentan Fernando Casal Bértoa y José Javier Olivas Osuna, los indicadores internacionales apuntan a un deterioro de los estándares democráticos desde que Sánchez asumió el poder en 2018.

A principios de este año, un informe de la Guardia Civil española, que revelaba abundantes pruebas de una presunta red de corrupción política liderada por el secretario de organización del PSOE, desencadenó la mayor crisis política en España desde que Pedro Sánchez llegara al poder en junio de 2018.

Desde entonces, el primer ministro ha comparecido en varias ocasiones, intentando minimizar el hecho de que numerosas personas de su entorno cercano, incluyendo su hermano, su esposa, su exvicepresidente y varios altos cargos públicos y directivos de empresas estatales, estén siendo investigados por delitos de corrupción. En estas intervenciones, además de presentarse como víctima de una trama, Sánchez reiteró en repetidas ocasiones su compromiso con la «regeneración democrática» y la «lucha contra la corrupción».

Sánchez expresó su «orgullo» por los avances democráticos de su gobierno, concretamente por haber «endurecido la legislación», «aumentado la transparencia y la rendición de cuentas» y «mejorado la posición de España en el ranking internacional de percepción y lucha contra la corrupción». Sin embargo, este optimismo del gobierno contrasta con las constantes críticas de los partidos de la oposición y los actores de la sociedad civil, que han denunciado un amplio proceso de erosión institucional en diversos ámbitos.

¿Regeneración o degeneración democrática?

Para determinar si Sánchez tiene razón al presumir de la regeneración democrática en España, es necesario analizar algunos indicadores internacionales sobre la calidad de la democracia.

El primer paso es evaluar la competencia electoral en España. Además de elecciones libres y justas —que, si bien la OSCE/ODIHR ha hecho algunas recomendaciones para mejorar la transparencia y la integridad, en España son indiscutibles—, las democracias requieren, entre otros elementos, un estado de derecho sólido.

Esto significa jueces independientes, libertad de los medios de comunicación para criticar al gobierno y un control efectivo de la corrupción. Desafortunadamente, en estas dimensiones clave de la calidad democrática, España muestra una trayectoria preocupante, muy lejos de lo que Sánchez afirma reiteradamente.

El índice de "estado de derecho" del Banco Mundial, que mide el respeto a los principios universales del estado de derecho en un país, muestra una disminución, pasando de 0,98 en 2018 a 0,82 en 2023.

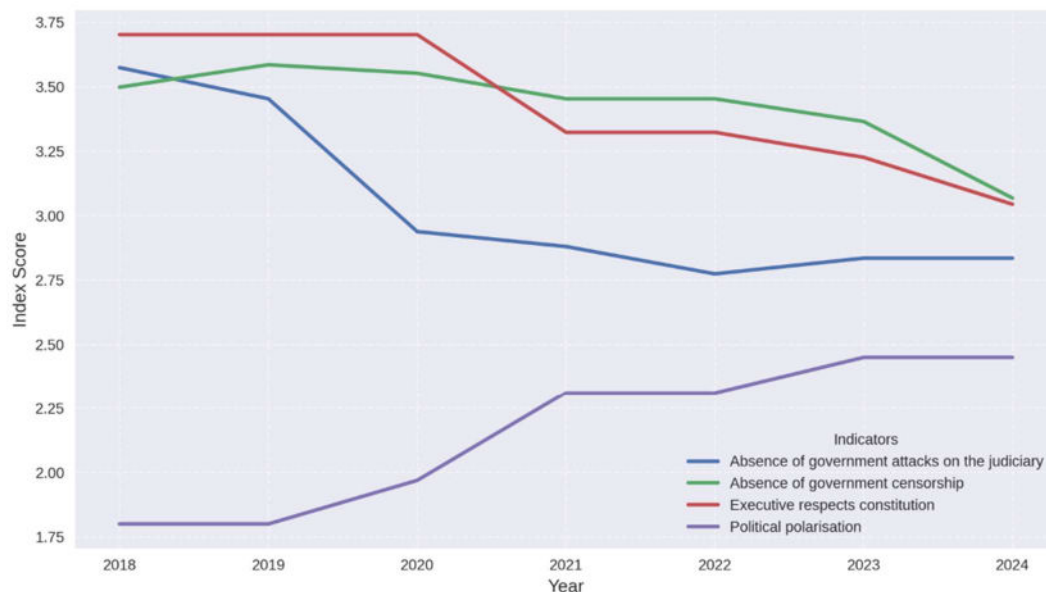
Aún más preocupante es la caída en el índice de "efectividad del gobierno" del Banco Mundial, donde España ha pasado de 0,97 en 2018 a 0,75 en 2023.

Puntuaciones democráticas en declive

El prestigioso proyecto internacional V-Dem (Varieties of Democracy), que publica anualmente las mediciones del nivel de democracia en todo el mundo, aún considera a España una democracia plena.

Sin embargo, contradice cualquier afirmación de que haya habido una regeneración democrática durante el mandato de Sánchez. Los ataques del gobierno al poder judicial han aumentado significativamente en los últimos años. El índice de V-Dem para medir esto, donde una puntuación de 4 indica ausencia de ataques, ha bajado de 3,57 en 2018 a 2,83 en 2024. No es de extrañar que, en el último Eurobarómetro, el 42% de los ciudadanos españoles considerara que la independencia judicial en el país es deficiente (solo Hungría, Grecia, Eslovaquia, Bulgaria, Croacia y Polonia obtuvieron peores resultados).

Figura 1: Puntuaciones de democracia en España (2018-2024)



Las puntuaciones de democracia han disminuido en España desde 2018

Nota: Elaborado por los autores con datos del proyecto V-Dem (Varieties of Democracy).

Muchas medidas del gobierno pueden haber contribuido a este deterioro. Por ejemplo, un decreto de 2021 anuló el poder del poder judicial para renovar los cargos judiciales. En 2023, se intentó nombrar a miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin la mayoría reforzada requerida. En 2024, el gobierno intentó sustraer al CGPJ la facultad de nombrar a los jueces del Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia. Y este año, se propuso una controvertida reforma del acceso a las carreras judiciales y de fiscalía, así como una reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La puntuación de España en el índice V-Dem sobre el respeto del ejecutivo a la Constitución ha descendido de 3,7 en 2018 a 3,0 en 2024. La Ley de Amnistía para los delitos relacionados con el intento de secesión catalana ha sido cuestionada por la Comisión de Venecia, los servicios jurídicos de la Comisión Europea y diversas asociaciones jurídicas y de la sociedad civil, por posibles vulneraciones de los principios de igualdad, separación de poderes y Estado de derecho.

La mayoría de los expertos la consideran una "autoamnistía", redactada precisamente por quienes se beneficiarán de la anulación de delitos como la malversación de fondos públicos, la desobediencia y el desorden público grave. El abuso de los decretos para legislar, eludiendo el control parlamentario, ha sido también una característica de este periodo, al igual que el incumplimiento de la obligación de presentar presupuestos anuales.

Los indicadores de V-Dem sobre libertad de expresión también han empeorado, pasando de 0,92 en 2018 a 0,89 en 2024 (1 = máxima libertad de expresión) y sobre censura a los medios, de 3,5 a 3 (4 = ausencia total de censura). Además, se han impulsado diversas iniciativas legislativas para controlar la gestión y el financiamiento de los medios de comunicación.

La ampliación y la selección de miembros del Consejo de Administración de RTVE con perfil político han generado una gran controversia, al punto de que Reporteros Sin Fronteras criticó su falta de conformidad con la legislación europea. Los periodistas han denunciado presiones editoriales y la falta de pluralismo en la entidad pública. La distribución de publicidad institucional entre los medios privados también ha generado controversia, percibida como un medio para ejercer presión, comprar lealtades y silenciar las críticas.

Corrupción política

Los índices de V-Dem sobre corrupción política, corrupción en el ejecutivo y clientelismo muestran incrementos del 178%, 540% y 80%, respectivamente, entre 2018 y 2024. Esto coincide con los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, que otorgó a España su peor puntuación (56 puntos) desde 2001 en 2024 (63 puntos es el promedio de la serie), situándola en el puesto 46 de 180 países, una caída de 10 posiciones en un año.

Las investigaciones sobre escándalos de corrupción han revelado una red de contratación irregular y colocación de personal en la administración y en empresas públicas. Los indultos a líderes independentistas, la reducción de penas por malversación y la creciente falta de transparencia gubernamental en diversos ámbitos –incluidos los numerosos pactos de gobierno con partidos independentistas cuyos acuerdos específicos permanecen en secreto– han contribuido a la percepción de falta de rendición de cuentas y de indefensión. España ha obtenido una pésima calificación en el Índice de Derecho a la Información (73 puntos de 150), pasando del puesto 86 en 2018 al 96 en 2024, entre 140 países. Asimismo, ha obtenido una calificación deficiente en el Índice Internacional de Transparencia Presupuestaria, situándose por debajo de la mayoría de los países de la OCDE.

V-Dem ha rebajado la calificación de España como democracia liberal de 0,78 en 2018 a 0,75 en 2024, incluyéndola en su último informe entre los 20 países con riesgo de autoritarismo. Si a esto añadimos los altísimos niveles de polarización política en España, sin precedentes desde el final de la transición democrática, con un aumento del 36% entre 2018 y 2024 según V-Dem, no es de extrañar que varios expertos hayan comenzado a alertar sobre la situación.

En resumen, las promesas de Sánchez de acabar con la corrupción y mejorar la calidad de la democracia en España no se han cumplido. Por el contrario, se presentan como logros precisamente aquellos ámbitos en los que el gobierno ha fracasado o no ha logrado cumplir sus objetivos. Si analizamos los principales índices internacionales de calidad democrática, España no ha experimentado una regeneración democrática, sino más bien una degeneración.

Una versión abreviada de este artículo fue publicada originalmente en el diario español El Mundo.

Nota: Este artículo refleja las opiniones de los autores y no la postura de EUROPP – European Politics and Policy ni de la London School of Economics. Crédito de la imagen: Unión Europea